

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 15 de marzo de 2021

Auto Interlocutorio No. \_\_\_\_\_

Magistrada Ponente: **PATRICIA FEUILLET PALOMARES**

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
REFERENCIA:	76111-33-33-001- <b>2019-00348-01</b>
ACCIONANTE:	VICENTE RIVEROS VIDALES RUIZ <a href="mailto:juridicagonzalo@hotmail.com">juridicagonzalo@hotmail.com</a>
ACCIONADO:	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR <a href="mailto:judiciales@casur.gov.co">judiciales@casur.gov.co</a> <a href="mailto:diana.piedrahita128@casur.gov.co">diana.piedrahita128@casur.gov.co</a>
ASUNTO:	DIRIME (CONFLICTO DE COMPETENCIA)

I.- ASUNTO

El Despacho decide el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo de Buga y el Juzgado 14 Administrativo de Cali, respecto del conocimiento de la demanda presentada por el señor **Vicente Riveros Vidales Ruiz** contra la **Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR**.

II.- ANTECEDENTES

La parte actora, a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, solicitó<sup>1</sup> la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio nro. 2016/OAJ del 19 de marzo de 2019, por medio del cual CASUR negó el reajuste anual de la asignación de retiro. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC.

El proceso inicialmente le correspondió por reparto al Juzgado 14 Administrativo de Cali<sup>2</sup> que, mediante auto interlocutorio nro. 507 del 16 de noviembre de 2017<sup>3</sup>, admitió la demanda. La providencia fue notificada el 7 de mayo de 2018<sup>4</sup>.

La parte demandada presentó escrito de contestación de la demanda<sup>5</sup>.

Mediante auto de sustanciación nro. 512 del 2 de julio de 2019<sup>6</sup>, se fijó fecha para audiencia inicial.

El 20 de agosto de 2019<sup>7</sup> se llevó a cabo audiencia inicial, que fue suspendida y mediante auto de sustanciación nro. 873 del 2 de diciembre de 2019<sup>8</sup> se fijó nueva fecha para continuar con la audiencia inicial.

<sup>1</sup> Ver folios 12

<sup>2</sup> Ver folio 23

<sup>3</sup> Ver folio 25

<sup>4</sup> Ver folio 47

<sup>5</sup> Ver folios 51- 60

<sup>6</sup> Ver folio 64

<sup>7</sup> Ver folios 65 - 68

<sup>8</sup> Ver folio 78

El 10 de diciembre de 2019<sup>9</sup> se continuó con la audiencia inicial. En la diligencia, el Juzgado 14 Administrativo de Cali negó la excepción de cosa juzgada, abstenerse de asumir el conocimiento del proceso con radicado 2017-00306 y remitir el expediente a los juzgados administrativos de Buga. Para ello consideró que carecía de competencia por el factor territorial, porque el último lugar de prestación de servicios del demandante fue Distrito de Policía de Buga.

Luego, el expediente correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Buga<sup>10</sup> que, por auto interlocutorio nro. 204 del 27 de febrero de 2020<sup>11</sup>, se abstuvo de avocar el conocimiento del proceso y planteó el conflicto de competencias con el Juzgado 14 Administrativo de Cali. Consideró que, por el principio de la *perpetuatio jurisdictionis*, al juez que asume el conocimiento de un asunto le resulta improcedente remitirlo por competencia territorial a otro funcionario judicial, por cuanto la ley ordena que debe conservar la competencia, a menos que una de las partes hubiese alegado la falta de competencia del operador judicial. También indicó que ninguna de las partes recurrió el auto admisorio de la demanda, ni la falta de competencia fue propuesta como excepción en la contestación de la demanda. Por lo tanto, estimó que el Juzgado 14 Administrativo de Cali debía seguir conociendo el proceso.

### III.- CUESTIÓN PREVIA

En primer lugar, destaco que la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca venía resolviendo los conflictos de competencia en virtud de una interpretación conjunta entre el numeral 4° del artículo 123 de la Ley 1437 de 2011 y la versión original del artículo 158 ibidem.

Efectivamente, el numeral 4° del artículo 123 del CPACA establece como una de las funciones de la Sala Plena de los tribunales administrativos la de dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre dos jueces administrativos del mismo distrito. Y ello resultaba plenamente compatible con lo dispuesto en la versión original del artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, según el cual el conflicto de competencia debía ser decidido «*por el Tribunal Administrativo respectivo*».

Sin embargo, como se sabe, recientemente se publicó la Ley 2080 de 2021, que introdujo modificaciones a la Ley 1437 de 2011. Uno de los preceptos normativos modificados fue, precisamente, el artículo 158.

De conformidad con la modificación introducida por el artículo 33 de la Ley 2080 de 2021, la nueva versión del artículo 158 de la Ley 1437 de 2011 es la siguiente:

Artículo 158. Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia entre los tribunales administrativos y entre estos y los jueces administrativos, de diferentes distritos judiciales, serán decididos, de oficio o a petición de parte, por el magistrado ponente del Consejo de Estado conforme al siguiente procedimiento:

Cuando un tribunal o un juez administrativo declaren su incompetencia para conocer de un proceso, por considerar que corresponde a otro tribunal o a un juez administrativo de otro distrito judicial, ordenará remitirlo a este. Si el

<sup>9</sup> Ver folios 80

<sup>10</sup> Ver folio 83

<sup>11</sup> Ver folios 85 - 86

tribunal o juez que recibe el expediente también se declara incompetente, remitirá el proceso al Consejo de Estado para que decida el conflicto.

Recibido el expediente y efectuado el reparto entre las secciones, según la especialidad, el ponente dispondrá que se dé traslado a las partes por el término común de tres (3) días para que presenten sus alegatos; vencido el traslado, el conflicto se resolverá en un plazo de diez (10) días, mediante auto que ordenará remitir el expediente al competente.

**Si el conflicto se presenta entre jueces administrativos de un mismo distrito judicial, este será decidido por el magistrado ponente del tribunal administrativo respectivo**, de conformidad con el procedimiento establecido en este artículo.

La falta de competencia no afectará la validez de la actuación cumplida hasta la decisión del conflicto.

Como se ve, se introdujo como cambio sustancial que los conflictos de competencia que se presenten entre jueces administrativos de un mismo distrito serán resueltos «*por el magistrado ponente del tribunal administrativo respectivo*».

Ahora, la Ley 2080 de 2021 no modificó el numeral 4° del artículo 123 del CPACA y, por ende, estamos en presencia de una antinomia, pues: por un lado, el numeral 4° del artículo 123 establece que los conflictos de competencia entre jueces de un mismo distrito deben resolverse por la Sala Plena del tribunal administrativo, mientras que, por el otro, el artículo 158 de la misma normativa prevé que esos asuntos deben ser decididos por el magistrado ponente.

Esa antinomia debe solucionarse conforme con los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes. Veamos.

- Artículo 5 de la Ley 57 de 1887:

Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

- 1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general;
- 2) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior; y si estuvieren en diversos Códigos preferirán, por razón de éstos, en el orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal. Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública.

- Artículo 2 de la Ley 153 de 1887: la ley posterior prevalece sobre la anterior.

En ese sentido, debe privilegiarse lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2080 de 2021, toda vez que: **i)** esa norma es la que regula de manera especial el trámite para resolver los conflictos de competencia y **ii)** se trata de una norma posterior a la prevista en el numeral 4° del artículo 123 del CPACA (tanto en su expedición, como en el articulado del propio código).

Por otra parte, hay quienes invocan que la modificación introducida en ese sentido por la Ley 2080 de 2021 carece de fuerza normativa, por cuanto la competencia reconocida en el numeral 4° del artículo 123 del CPACA es la

reproducción del numeral 4º del artículo 41 de la Ley 270 de 1996, que tiene naturaleza de ley estatutaria y que, por ende, no puede ser reformada por una ley ordinaria. A mi juicio, esa disposición tan particular (la de dirimir conflictos de competencia entre juzgados administrativos de un mismo distrito) no está cobijada por la reserva de ley estatutaria que prevé el literal b) del artículo 152 de la Constitución Política y que está instituida a favor de la materia «*administración de justicia*».

Finalmente, la regla de decisión introducida por la Ley 2080 de 2021 sí es aplicable al presente asunto, de acuerdo con el régimen de vigencia y transición normativa dispuesto por la propia ley.

El artículo 86 de la ley establece:

Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.

La disposición normativa prevé las reglas que definen cuándo se empiezan a aplicar las modificaciones introducidas por la Ley 2080 en relación con los procesos y trámites que se adelantan con la Ley 1437 de 2011. Esas reglas pueden resumirse de la siguiente manera:

- Regla general: las normas rigen a partir de la fecha publicación (25 de enero de 2021).
- Regla de excepción 1: las normas que modifican la competencia de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado se aplicarán a aquellas demandas o asuntos presentados a partir del 25 de enero de 2022 (un año después de la publicación de la ley).
- Regla de excepción 2: las normas que regulan lo relacionado con el dictamen pericial se aplicarán a los procesos y trámites en los cuales no se hayan decretado pruebas.



- Regla de excepción 3: las normas que versen sobre: i) recursos, ii) práctica de pruebas, iii) audiencias, iv) diligencias, iv) términos procesales, v) incidentes y vi) notificaciones no aplicarán respecto de recursos ya interpuestos, practica de pruebas decretadas, audiencias convocadas, diligencias iniciadas, términos que hubieren comenzado a correr, incidentes en curso y notificaciones que se estén surtiendo.

Estimo que la modificación introducida por el artículo 33 de la Ley 2080 de 2021 no se subsume en alguna de las excepciones previstas en artículo 86 y, por consiguiente, queda sujeta a la regla general: la aplicación a partir del 25 de enero de 2021.

Claramente, esa modificación no versa sobre el dictamen pericial (excepción 2) y tampoco tiene que ver con recursos interpuestos, práctica de pruebas decretadas, audiencias convocadas, diligencias iniciadas, términos que hayan empezado a correr, incidentes promovidos o notificaciones en curso (excepción 3).

Y, como se expondrá, el artículo 33 de la Ley 2080 de 2021 no hace parte de «*las normas que modifican la competencia de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado*» (excepción 1). Veamos.

Es sabido que uno de los principales objetivos de la Ley 2080 de 2021 era modificar el régimen de competencias existente entre juzgados administrativos, tribunales administrativos y Consejo de Estado. Eso lo hizo, principalmente, a través de las siguientes modificaciones:

Ley 2080 de 2021	Alteración en la Ley 1437 de 2011	Tema
Artículo 23	Creó el artículo 136A	Control inmediato de fallos de responsabilidad fiscal
Artículo 24	Modificó el artículo 149	Competencia del Consejo de Estado en única instancia
Artículo 25	Creó el artículo 149A	Competencia del Consejo de Estado con garantía de doble conformidad
Artículo 26	Modificó el artículo 150	Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia
Artículo 27	Modificó el artículo 151	Competencia de los tribunales administrativos en única instancia
Artículo 28	Modificó el artículo 152	Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia
Artículo 29	Modificó el artículo 154	Competencia de los juzgados administrativos en única instancia
Artículo 30	Modificó el artículo 155	Competencia de los juzgados administrativos en primera instancia
Artículo 31	Modificó el artículo 156	Competencia por razón del territorio
Artículo 33	Modificó el artículo 157	Competencia por razón de la cuantía
Artículo 33	Modificó el artículo 158	onflictos de competencia

Hay que agregar que el régimen de competencias también se vio alterado por la modificación del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 (artículo 62 de la Ley 2080 de 2021), que versa sobre la procedencia del recurso de apelación. Ello, por



cuanto ahora se admite el recurso de apelación frente a más providencias<sup>12</sup> y ello implica que los superiores funcionales deberán conocer más asuntos de los que venían conociendo.

A mi juicio, la expresión «*las normas que modifican la competencia*», contenida en la excepción 1 del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, se refiere a aquellas que introducen cambios en las reglas que determinan la asignación o conocimiento de los asuntos por parte de las autoridades judiciales. Ese entendimiento encuentra respaldo a partir de las siguientes premisas:

- ¿Por qué se impidió que las normas que modificaran las competencias empezaran a regir de manera inmediata? Porque implicaría un aumento significativo en los asuntos que deberán conocer los juzgados y tribunales administrativos y ello perturbaría drásticamente la capacidad de respuesta del servicio de justicia.
- No en vano el artículo 83 de la Ley 2080 de 2021 dispuso la creación de nuevos despachos y dotación de recursos para su funcionamiento, «*con el fin de lograr la adecuada transición del nuevo régimen de competencias y la implementación de las reformas aprobadas*». Esa nueva planta «*se creará y hará efectiva una vez que el Gobierno Nacional garantice las apropiaciones presupuestales necesarias para ello*».
- En otras palabras, finalidad de la excepción 1 es conceder un plazo prudencial (un año) para que se lleven a cabo las gestiones necesarias que permitan la implementación de la nueva planta de despachos judiciales.

Siendo así, no quedarán cobijadas por la excepción 1 las normas que no inciden en las reglas de asignación o conocimiento de los asuntos a asumir por parte de los juzgados administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, pues qué sentido tiene posponer la aplicación de una norma que no afecta la carga de procesos o asuntos.

Esto último es lo que sucede con la modificación del artículo 33 de la Ley 2080 de 2021. Esa norma no afecta la carga de asuntos que conocen los tribunales administrativos, en tanto que la asignación del conocimiento de conflictos de competencia se mantiene inalterable.

El hecho de que, ahora, la providencia que resuelva el conflicto deba ser dictada por el magistrado ponente, y no por la Sala Plena, no es un tema del régimen de competencias (que interesa a la excepción 1 del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021). Y es que resolver el conflicto de competencia mediante providencia de ponente en nada incrementa la carga de asuntos de los tribunales administrativos y, por el contrario, favorece los principios de economía y celeridad.

En conclusión, las providencias que resuelven los conflictos de competencia deben ser proferidas por el magistrado ponente a partir de la publicación de la Ley 2080 de 2021. Por esa razón, el auto que resuelve el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo de Buga y el Juzgado Catorce Administrativo de Cali será emitido por la ponente.

---

<sup>12</sup> Por ejemplo, el rechazo de la reforma de la demanda, el que imprueba la conciliación judicial o extrajudicial, el que deniegue o modifique una medida cautelar. Además, antes había unas providencias que no admitían apelación cuando eran dictadas por los tribunales administrativos, limitación que ahora desapareció.

#### IV.- CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, la competencia en asuntos como el aquí debatido se fija de la siguiente manera:

*“ARTÍCULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:*

*(...)*

*3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará **por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios**”.* (Negrillas del Tribunal)

De la revisión de la citada norma se advierte que, para fijar la competencia en materia laboral y, por regla general, se tendrá en cuenta el último lugar donde se presentó o debió prestarse los servicios.

Por su parte, el artículo 16 del Código General del Proceso establece la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la competencia:

*“ARTÍCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.*

***La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso.** Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente”.* (Negrillas del Tribunal)

De la anterior norma se puede extraer que, salvo la falta de competencia por los factores subjetivo y funcional, en los demás casos el juez que asumió el conocimiento del proceso no podrá desprenderse del mismo, siempre que esta situación no se hubiese discutido oportunamente. Ese planteamiento concuerda con lo previsto en el inciso segundo del artículo 139 del CGP *“El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional”*.

En efecto, si el juez en un momento inicial del proceso o las partes en las oportunidades procesales pertinentes no alegan o discuten la falta de competencia por factores diferentes al subjetivo y funcional, ello no podrá ser constitutivo de causal de nulidad o de remisión a otro funcionario judicial, en virtud del principio de prorrogabilidad de la competencia.

El Consejo de Estado, en providencia del 24 de noviembre de 2020<sup>13</sup>, precisó:

*“Es por esta razón que no puede entenderse que los artículos 158 y 168 del CPACA permiten que, en cualquier estado del proceso, posterior a la*

<sup>13</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A". Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 11001-33-35-028-2017-00360-01(1099-19).

*admisión de la demanda y la conformación de la litis procesal, se surta la remisión del expediente a otro funcionario o despacho judicial que se considere es el competente para asumir el asunto por los factores de competencia distintos al subjetivo o funcional. **En estos casos, se conservará la competencia para continuar con el conocimiento del asunto.***

*En resumen, frente a la falta de competencia se advierte que los momentos oportunos y los efectos de su determinación, pueden sintetizarse de la siguiente manera:*

- ✓ *Si se decreta la falta de competencia al momento de decidir sobre la admisión de la demanda, el juez, la sala o sección lo remitirá al que considere competente para ello, para lo cual se hará uso de lo regulado en el artículo 158 del CPACA.*
- ✓ *Si el despacho judicial deja pasar tal oportunidad, la parte demandada o el agente del Ministerio Público podrán, vía recurso de reposición contra el auto admisorio – artículo 242 del CPACA-, hacer notar tal falencia y pedir la remisión.*
- ✓ *Si esta ocasión tampoco se aprovechó para tal efecto, podrá proponerse por parte del demandado la irregularidad como excepción previa, al tenor del artículo 100 numeral 1.º del CGP, en armonía con el artículo 175 del CPACA, la cual -de prosperar- dará lugar a la remisión del proceso al competente.*
- ✓ *De no procederse conforme lo anterior, es decir, no remitir de oficio el proceso, no recurrirse el auto admisorio o no proponerse la excepción previa por el demandado, surgen varias situaciones a saber:*
  - a. *Si se trata de falta de competencia por factores diferentes al subjetivo o funcional, la competencia se prorroga y la irregularidad se sanea. Por tanto, no podrá generarse la remisión del proceso a voces del artículo 139 inciso segundo del CGP.*
  - b. *Si la falta de competencia se origina por los factores subjetivo o funcional, ello podrá originar que en cualquier momento del proceso, este se remita al que sí lo sea, en la medida en que no podrá ser fallado el asunto por un funcionario incompetente por estos factores, so pena de que se origine la causal de nulidad del fallo (artículos 16 y 138 inciso primero del CGP)<sup>14</sup>.*

*En síntesis, es claro que la falta de competencia por factores distintos al subjetivo y funcional, a voces de las disposiciones procesales, **no constituye una causal de nulidad, sino que genera una irregularidad que se entiende subsanada, al no utilizarse oportunamente los mecanismos que para tal efecto regulan las normas procesales, tales como, la orden de remisión por competencia en forma oficiosa al momento de decidir sobre la admisión, el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda o la excepción previa propuesta por el demandado de ser procedente***. (Negrillas del Tribunal).

En consecuencia, como el conflicto se generó en virtud del factor territorial y las partes guardaron silencio en las oportunidades que podían advertir sobre la

<sup>14</sup> Artículo 16 del CGP, ya citado y por su parte el artículo 138 prescribe: «Efectos de la declaración de Falta de Jurisdicción o Competencia y de la nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.»



competencia, el Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Cali no podía declarar su incompetencia y deberá continuar con el trámite procesal del presente asunto. Así las cosas, le asiste la razón al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buga al señalar que carece de competencia para conocer del proceso de la referencia, toda vez que la competencia recae en el Juzgado 14 Administrativo de Cali, en el que se adelantaron las diferentes etapas procesales y las partes no presentaron objeción alguna sobre dicho asunto, por lo que se prorrogó la competencia.

Así las cosas, si bien, en principio, la competencia por el factor territorial no recaía en el Juzgado 14 Administrativo de Cali, el juez realizó todo el trámite correspondiente a la admisión y a la audiencia inicial, hasta la decisión de excepciones previas, etapas procesales en las que las partes intervinieron y guardaron silencio sobre la falta de competencia del funcionario.

Lo anterior quiere decir que la ausencia de competencia que podría presentarse se entiende saneada, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: DIRÍMASE** el conflicto de competencias suscitado entre el Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Cali y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buga, en el sentido de declarar que el Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Cali es el competente para seguir conociendo del presente asunto, conforme a lo referido en la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO:** Por la Secretaría de la Corporación, **REMÍTASE** el expediente de la referencia al Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito de Cali, como asunto de su competencia.

**TERCERO:** Por secretaría, comunicar la presente decisión al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Buga y efectuar las anotaciones correspondientes.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Firmado electrónicamente por Samai  
**PATRICIA FEUILLET PALOMARES**  
Magistrada